

Popayán, febrero 19 de 2025

Doctora

AURA MARIA ROSERO NARVAEZ

Juez Cuarta Civil del Circuito de Popayán
Ciudad.

Exp. No. 20240000700

Ref: Proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual

De: JOSE GERMAN BETANCOURTH y otros

Contra: JAIME ARTURO BASTIDAS Y HDI SEGUROS

Como apoderado de los demandantes en el asunto de la referencia, me permito descorrer traslado de las objeciones al JURAMENTO ESTIMATORIO presentadas por la contraparte.

Para ello, en primer término, le ruego se sirva desestimar las formulaciones propuestas por los apoderados de la contraparte, las cuales en síntesis son una copia de otra y que se pueden resumir de la siguiente manera:

1.- ARGUMENTOS DE LAS OBJECIONES:

1.1. Del demandado Jaime Bastidas:

OBJECION A LA CUANTIA EN RELACION CON WILLIAM NARVAEZ: Se señala que “la parte actora no prueba los egresos e ingresos que supuestamente ha dejado de percibir”.

EN CUANTO A LA LIQUIDACION DEL LUCRO CESANTE PASADO Y FUTURO, se señala que nuestra parte:

“no acreditó los ingresos que percibía antes de la ocurrencia del accidente y tampoco la pérdida de la capacidad laboral si a ello hubiera lugar”(…). “Sumado a ello, el demandante NO efectúa la liquidación del mismo de acuerdo a las formulas que sobre el particular ha desarrollado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”. Por último señala “que no habría lugar a reclamar un LUCRO CESANTE pues las perdidas a las que se refiere por incapacidad han sido cubiertas por el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL”.

EN CUANTO A LA SOLICITUD DE PERJUICIOS EN FAVOR DEL SR JOSE GENRAMN BETANCOURT se señala que la factura de venta que se aporta como sustento no cumple los requisitos del ESTATUTO TRIBUTARIO Y EN RELACIÓN CON EL LUCRO CESANTE PARA EL SR JOSE GERMAN BETANCOURT: SEÑALA que “no hay documentación contable, bancaria o financiera, con información veraz que sirva de base para que se elabore el cálculo aritmético de liquidación de lucro cesante”.

1.2.- Por su parte la ASEGURADORA demandada señaló lo siguiente:

“OBJETAR el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos: A) Daño emergente y lucro cesante reclamados por el señor José Germán Betancourt.

i) Frente al daño emergente solicitado se debe decir que para acreditar la suma pretendida únicamente se allegó la factura de venta No. 0337 emitida por el Taller Escobar, documento al que no podrá otorgársele ningún valor probatorio hasta que la persona que la emitió ratifique su contenido, conforme se solicita en el acápite de pruebas, por lo que dicho documento carece de carácter demostrativo alguno; (ii) frente al lucro cesante, no obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, el periodo de tiempo en el que el vehículo permaneció inmovilizado; (iii) tampoco se probó fehacientemente los ingresos que supuestamente se devengaba por el demandante como resultado de la explotación de dicho automotor; (iv) la certificación emitida por la sociedad Coomotoristas del Cauca, con la cual se pretende acreditar los supuestos ingresos que percibía el señor Betancourt Gómez, no aporta ningún elemento adicional, como facturas, recibos, estado de cuenta para el año 2022, desprendibles de declaración de renta de la Dian del año 2022, o cualquier otro que dé cuenta de que en efecto, al demandante le ingresaban de forma mensual, las sumas aquí indicadas, y; (v) en todo caso, a dicha certificación no podrá otorgársele ningún valor probatorio hasta que la persona que la emitió ratifique su contenido, tal y como se solicitará en el acápite de pruebas. Por otra parte, el juramento estimatorio carece de cálculo matemático alguno que permita vislumbrar el origen de las sumas líquidas ahí referidas, por lo que las mismas se derivan únicamente del arbitrio de la parte demandante, careciendo de prueba suficiente que las justifique.

B) Frente al lucro cesante de William Narváez Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al lucro cesante del señor William Narváez, debe advertirse que:

(i) En el expediente no reposa ninguna prueba que acredite que el demandante no pudo continuar percibiendo ingresos después de la

ocurrencia del accidente de tránsito; (ii) no se observa que al plenario se haya allegado dictamen emitido por Junta de Calificación, ni concepto médico emitido por su EPS o su ARL que acredite la gravedad de la lesión y que este se encuentra en una condición de salud que no le permite ni le permitirá realizar actividades laborales en el futuro; (iii) tampoco se allegó certificación laboral, contrato o ningún otro elemento documental que acredite que el accionante se encontraba laborando para la fecha de los hechos y que por lo tanto dejó de percibir un ingreso como resultado del accidente; (iv) el juramento estimatorio carece de fórmula aritmética alguna que permita inferir que el cálculo realizado corresponde a las fórmulas delineadas por la jurisprudencia para los casos en los cuales deba tasarse el lucro cesante reclamado...()”

2.- PLANTEAMIENTOS DE NUESTRA PARTE:

El primer argumento que debo exponer frente a las manifestaciones efectuadas por los colegas, es que debemos partir de que nos encontramos frente a un proceso declarativo de naturaleza verbal, ello implica que además de los elementos probatorios que se anexen con la demanda, la parte que alega un hecho, tiene la oportunidad de completar su carga probatoria, dentro de la oportunidad procesal que la ley permite para ello, lo contrario, sería desnaturalizar la esencia del mencionado proceso, y convertirlo en un trámite sumario, en el que solamente, con las pruebas allegadas en la demanda, el juez estuviese obligado a fallar.

Lo anterior sumado, a que los apoderados en sus propuestas de objeción, sugieren que el cálculo de los perjuicios materiales por lucro cesante, no corresponden a las que en su criterio a aprobado la H. Corte Suprema de Justicia, pero ello, sin señalar a la señora Juez, cuáles son dichas fórmulas mágicas que ellos exponen, pues, al respecto, dentro del ejercicio profesional que he llevado en 30 años, son las mismas que he sustentado para éstos eventos indemnizatorios, no solo como abogado litigante, sino también como auxiliar de la justicia. En este aspecto, no basta simplemente con objetar porque no me parece, sino confrontar con una nueva liquidación cuales serían las fallas de la presentada por nuestra parte, ya que, en efecto, al ser materia puramente matemática, no se trata simplemente de esgrimir argumentos baladíes, sino exponer al juez cuál es la fórmula que en concepto de quien objeta debe aplicarse al caso concreto.

En lo que respecta a la actividad laboral del afectado directo, clarísimo está, que, existe una presunción legal que señala que en Colombia todas las personas mayores de edad se presumen hábiles, laboralmente activas y generan por lo menos un salario mínimo legal vigente en cualquier actividad a la que se dediquen, y la carga probatoria se invierte para quien quiera

demostrar lo contrario. En ese sentido, no basta señalar a grandes voces que NO HAY PRUEBA DE ACTIVIDAD LABORAL del afectado o de su ingreso, cuando en primer lugar, recordemos que el señor WILLIAM NARVAEZ, precisamente se encontraba desempeñando su labor como conductor al momento de los hechos lo que se probó plenamente con el hecho de su afiliación a riesgos profesionales, y que lo mínimo que se acepta debe ganar es un salario mínimo legal en dicha actividad. Igualmente, este aspecto será objeto de demostración adicional en el periodo probatorio, con los testimonios y demás pruebas solicitadas.

Para proceder a aclarar los aspectos relativos a la merma laboral del afectado WILLIAM NARVAEZ, sobre la cual refieren los colegas en sus líbelos de objeción, debo señalar que se informó en la demanda el trámite en ese momento en ciernes sobre la valoración que se le realizaba por la ARL SURA al respecto. Pues bien, dicha prueba ya fue practicada y consolidada, y me permito, para todos los efectos legales, añadirla a este escrito para que ella sirva de plena prueba al momento de efectuar la liquidación final respectiva, anotando que la valoración arroja un 50.23% de pérdida de capacidad laboral, la cual fue impugnada por nuestra parte por considerar que es inferior al daño real sufrido por WILLIAM NARVAEZ, de tal forma que, cuando se decida lo pertinente, estaré informando al juzgado para establecer el porcentaje definitivo, o si se mantiene el ya calificado.

En este punto, debo aclarar a la colega representante del señor JAIME BASTIDAS, que, en Colombia, el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, no paga indemnizaciones derivadas de perjuicios morales o lucro cesante o daño emergente, ya que, ante esas entidades, lo que se pretende en menor caso es el pago de incapacidades, y en mayor caso el tema de pensión de invalidez cuando a ello hubiere lugar. En ese sentido, si la abogada alega que no es procedente la solicitud indemnizatoria por que el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIANO ya le pagó a mi cliente dichos conceptos solicitados en esta acción, lo que debe hacer es aportar los documentos que certifiquen tal pago, para poder confrontar ante su despacho, el juramento estimatorio pretendido.

Por último, de la historia clínica allegada, sin mucho esfuerzo, Su Señoría podrá verificar la gravedad de las lesiones sufridas por el señor WILLIAM NARVAEZ, así que, señalar que no hay prueba de que no haya podido continuar sus labores es realmente inaceptable, ya que se trata de una persona que no solo se salvo de la muerte milagrosamente, sino que con suerte podrá volverá a caminar y a recuperar la movilidad de su brazo izquierdo, aspectos que, reitero, se caen de su peso con la simple lectura de la información clínica y con el dictamen de invalidez allegado.

Aporto como prueba documental la valoración por junta de calificación de invalidez de la ARL SURA y una liquidación de soporte con base en la información allegada.

De la señora Juez, atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amadeo Rodríguez Muñoz', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

AMADEO RODRIGUEZ MUÑOZ
C.C. No. 76.305.798 de Popayán.
T.P. No. 63.746 del C.S.J.